JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE BOGOTA

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Ref: Proceso ejecutivo para la efectividad de la garantía real de JOSE DANIEL ARANGO GOMEZ contra LAURA FERNANDA ARANGO RODRIGUEZ.
RAD. 110014003020 2019 01131 00

Visto el poder allegado al folio 70, el Juzgado DISPONE:

RECONOCER PERSONERIA al abogado DANIEL ARMANDO AREVALO RODRIGUEZ, identificado con CC No. 79.910.983 y TPA No. 135.763 del C.S. de la J. como apoderado judicial de la demandada, LAURA FERNANDA ARANGO RODRIGUEZ, en la forma y términos del poder que obra al folio 70.

NOTIFÍQUESE (4)

(firma electrónica)
GLORIA INES OSPINA MARMOLEJO
JUEZ

*JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE
BOGOTÁ D.C.*

*La presente decisión es notificada por anotación en ESTADO
ELECTRONICO No. 030 Hoy veintiocho (28) de abril de 2021
a la hora de las 8:00 a.m.*

La Secretaria

Diana María Acevedo Cruz.

Firmado Por:

GLORIA INES OSPINA MARMOLEJO
JUEZ

**JUZGADO 020 MUNICIPAL CIVIL ORAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-
SANTAFE DE BOGOTA D.C.,**

Ref: Proceso ejecutivo para la efectividad de la garantía real
RAD. 110014003020 2019 01131 00

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

cbb378293b0dd3b95330a6f65dde87e9f2e874f2c128643e48ae642a283a9312

Documento generado en 27/04/2021 04:17:26 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE BOGOTA

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Ref: Proceso ejecutivo para la efectividad de la garantía real de JOSE DANIEL ARANGO GOMEZ contra LAURA FERNANDA ARANGO RODRIGUEZ. RAD. 110014003020 2019 01131 00

Vista la solicitud de secuestro del inmueble objeto de gravamen hipotecario, formulada por el apoderado de la parte ejecutante y el certificado de tradición allegado donde aparece inscrita la medida de embargo decretada por este Juzgado, en cuanto no obra respuesta de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro respecto a la inscripción de la medida cautelar, comunicada mediante Oficio 0263 del 22 de enero de 2020, con fundamento en el numeral 1 del artículo 593 del CGP, el Juzgado, previo a decidir sobre el secuestro solicitado, DISPONE:

Ofíciase al Registrador de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Centro, para que se sirva remitir respuesta respecto de la medida de embargo del inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 50C-11173, comunicada mediante Oficio 0263 del 22 de enero de 2020. Remítase directamente por el Juzgado el oficio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 806 de 2020.

NOTIFÍQUESE (4)

(firma electrónica)

**GLORIA INES OSPINA MARMOLEJO
JUEZ**

*JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE
BOGOTÁ D.C.*

*La presente decisión es notificada por anotación en ESTADO
ELECTRONICO No. 030 Hoy veintiocho (28) de abril de 2021
a la hora de las 8:00 a.m.*

La Secretaria

Diana María Acevedo Cruz.

Firmado Por:

**GLORIA INES OSPINA MARMOLEJO
JUEZ**

**JUZGADO 020 MUNICIPAL CIVIL ORAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-
SANTAFE DE BOGOTA D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

ad3d8be481170d26c9e6439662ec4074c68f1eefe1b8d1b7c3b5abed83797d6f

Documento generado en 27/04/2021 05:50:41 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE BOGOTÁ

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Ref: Proceso ejecutivo para la efectividad de la garantía real de JOSE DANIEL ARANGO GOMEZ contra LAURA FERNANDA ARANGO RODRIGUEZ. RAD. 110014003020 2019 01131 00

En escrito que antecede, la ejecutada LAURA FERNANDA ARANGO RODRÍQUEZ, presenta derecho de petición en el que pone de presente, en síntesis, las presuntas actuaciones ilegales que se han desplegado en su contra, del aquí demandante y de su familia, y de sus bienes, aprovechando que su padre –ejecutante- es una persona mayor de 85 años que padece de la enfermedad de Alzheimer, motivo por el cual solicita: (i) se adelante el procedimiento de prueba trasladada al tenor del artículo 174 de CPC al Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, audiencia virtual del día 8 de septiembre de 2020 a la 11:00 am proceso de resolución de compraventa con radicado No. 1100131030-26-2019-00693-00 (ii) copia de todas las actuaciones legales realizadas en este proceso, (iii) se compulsen copias de esta denuncia en contra del abogado Rene Moreno Alfonso al Consejo Superior de la Judicatura por actuaciones fraudulentas e ilegales de presentar falsas denuncias abusando del grave estado de inferioridad de su padre por Alzheimer y (iv) cita al juzgado para saber el estado del proceso.

Pues bien, lo primero que debe poner de presente el despacho a la libelista, es que el derecho de petición que se presenta en el marco de proceso judicial debe atemperarse a las reglas y términos de los procesos judiciales, por lo que los puntos contentivos de su pedimento se resolverán en la etapa procesal oportuna y con sujeción a las normas propias de este proceso ejecutivo para la efectividad de la garantía real. Así lo definió la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, a saber en reciente sentencia, T -394 de 2018, la alta corporación sostuvo:

«Ahora bien, en lo que respecta al derecho de petición ante autoridades judiciales, esta Corporación ha precisado sus alcances al manifestar que si bien es cierto que el derecho de petición puede ejercerse ante los jueces y en consecuencia estos se encuentran en la obligación de tramitar y responder las solicitudes que se les presenten,[37] también lo es que “el juez o magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -como también las partes y los intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas no son necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son presentadas peticiones relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio”.[38]

En este sentido, la Corte ha sostenido que el alcance del derecho de petición encuentra limitaciones respecto de las peticiones presentadas frente a autoridades judiciales, toda vez que han de diferenciarse los tipos de solicitudes, las cuales pueden ser de dos clases: (i) las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que se encuentran reguladas en el procedimiento respectivo de cada juicio, debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para tal efecto; y (ii) aquellas peticiones que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial bajo las normas generales del derecho de petición que rigen la administración y,[39] en especial, de la Ley 1755 de 2015».

En ese orden, por versar la petición de la ejecutada con puntos que tocan con el debate de este proceso compulsorio, debe incoar sus requerimientos dentro de las etapas procesales oportunas, v.g. su petición de decreto de pruebas deberá efectuar en el momento señalado

para el efecto en este tipo de procesos. De igual manera, sus manifestaciones relativas sobre las presuntas actuaciones ilegales que le han causado daños en contra suyo, de su familia y de sus bienes deberán elevarse en la etapa procesal correspondiente, que no es esta.

De otra parte, se le requiere a la demandada para que en lo sucesivo presente sus memoriales por conducto de un profesional del derecho, comoquiera que no puede obrar en causa propia dentro del proceso de la referencia al tratarse el *sub – lite* de un proceso de menor cuantía, por lo que no se puede litigar en causa propia sin tener la condición de abogado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1971.

Finalmente, por ser procedente, por la secretaría del juzgado, expídanse las copias solicitadas por la ejecutada de la integralidad de la actuación.

NOTIFÍQUESE (4)

(firma electrónica)
GLORIA INES OSPINA MARMOLEJO
JUEZ

*JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE
BOGOTÁ D.C.
La presente decisión es notificada por anotación en ESTADO
ELECTRONICO No. 030 Hoy veintiocho (28) de abril de 2021
a la hora de las 8:00 a.m.

La Secretaria

Diana María Acevedo Cruz.*

Firmado Por:

GLORIA INES OSPINA MARMOLEJO
JUEZ
**JUZGADO 020 MUNICIPAL CIVIL ORAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-
SANTAFE DE BOGOTA D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

5b723e0741b02c1f8f0b67512e3ba118e0a5b3cd73ad4d42b0783316f1fc1f08

Documento generado en 27/04/2021 05:21:25 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE BOGOTA

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Ref: Proceso ejecutivo para la efectividad de la garantía real de JOSE DANIEL ARANGO GOMEZ contra LAURA FERNANDA ARANGO RODRIGUEZ.
RAD. 110014003020 2019 01131 00

Surtido el trámite correspondiente, procede el Juzgado a decidir la excepción previa de INCAPACIDAD DEL DEMANDANTE, propuesta a través de recurso de reposición por el apoderado judicial de la demandada, contra el auto de mandamiento de pago calendarado 13 de enero de 2020.

ANTECEDENTES

La recurrente, en síntesis alega su inconformidad indicando que en el Juzgado 11 de Familia del Circuito de Bogotá Rad. 11001311001120180005900 cursa proceso de INTERDICCION en contra del señor JOSE DANIEL ARANGO GOMEZ, en razón a su condición de discapacitado mental absoluto, proceso que en la actualidad se encuentra suspendido.

Así mismo, en la FISCALIA 149 SECCIONAL DE BOGOTA CUI 730016099093201705531 cursa denuncia pena por el delito de abuso de condiciones de inferioridad siendo víctima el señor JOSE DANIEL ARANGO GOMEZ, el cual, se encuentra en trabajo metodológico y en espera de la mesa de trabajo para la conexidad de delitos, conforme a la solicitud anexa.

Lo anterior, conforme a la evaluación neuropsicológica de fecha 17 de noviembre de 2012 realizada por la Dra. Eugenia Solano Gutiérrez y 9 de agosto de 2017 del Dr. Mario Muñoz, y en atención a la evaluación neuropsicológica de fecha 6 de diciembre de 2017 adelantada por el Dr. Gabriel Arango, el señor José Daniel Arango Gómez fue diagnosticado en demencia en la enfermedad de Alzheimer de comienzo tardío.

Menciona que el Dr. José Daniel Arango no puede en la actualidad tomar decisiones que afecten su patrimonio directamente, ya que no puede comprender el alcance de sus actuaciones, en cuanto presenta no solamente una alteración en el manejo del lenguaje, sino cambios mayores en su funcionalidad, siendo en la actualidad una persona discapacitada, que ha perdido su autonomía, es decir, que no es capaz de tomar sus propias decisiones.

Expresa que las evaluaciones neuropsicológicas, fueron ratificadas, en virtud del dictamen médico legal proferido por el Instituto de Medicina Legal de fecha 17 de enero de 2019, por parte del especialista Dr. Gabriel Mercado Lara, en virtud del cual se declaró que el señor José Daniel Arango Gómez es un discapacitado mental absoluto.

Manifiesta que en ese orden de ideas, el señor José Daniel Arango Gómez se encuentra plenamente incapacitado para otorgar un poder especial, amplio y suficiente para impetrar una demanda judicial.

Señala, a su vez, que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá emitió la Circular CSJBTC19-97 de fecha 6 de noviembre de 2019, traslado a los Jueces del Distrito Judicial de Bogotá la condición de discapacidad que presenta el Dr. José Daniel Arango Gómez, la cual allega.

Por lo expuesto, solicita se revoque el auto de mandamiento de pago, en razón a la incapacidad del demandante, se ordene el levantamiento de las medidas cautelares y se condene en costas y perjuicios a la parte ejecutante.

Del recurso interpuesto se corrió traslado a la parte ejecutante, cuyo apoderado judicial procedió a descorrerlo, manifestando que no es cierto que el señor José Daniel Arango

Gómez sea una persona incapaz, la existencia de un proceso de interdicción iniciado por la señora Laura Fernanda Arango Rodríguez contra su padre, señor José Daniel Arango Gómez, en el Juzgado 11 de Familia de Bogotá expediente No. 2018-059, no significa que sea un incapaz y menos cuando el juez natural para esta clase de proceso desconoció la prueba pericial mencionada y aportada por la ejecutada en el presente proceso.

Menciona que el dictamen pericial aportado con el recurso fue presentado al Consejo Superior de la Judicatura informando que el señor José Daniel Arango Gómez era discapacitado sin ser ello cierto y sin que haya declaración de interdicción alguna.

Manifiesta que el ejecutante en pleno uso de sus facultades le otorgó poder, por lo tanto, se encuentra debidamente representado para reclamar sus derechos patrimoniales. En las reuniones y conversaciones con su mandante no observó ninguna limitación en sus facultades mentales, motivo por el cual celebró contrato de prestación de servicios profesionales y el poder otorgado fue debidamente autenticado ante Notario Público, quien no hizo observación alguna sobre la condición mental del otorgante.

Agrega que la conducta asumida por la señora Laura Fernanda Arango Rodríguez contra su padre, originó el trámite de la medida de protección No. 1844 de 2019 ante la Comisaría de Familia de Teusaquillo, que ordenó imponer medida de protección en favor de José Daniel Arango Rodríguez, decisión confirmada por el Juzgado 16 de Familia de Bogotá.

Aduce que la señora Laura Fernanda Arango Rodríguez no solo alega que su padre es incapaz sino también pretende que su hermana Sandra Natalia Arango Rodríguez sea declarada incapaz mediante proceso que promueve en su contra y que se tramita en el Juzgado 21 de Familia con radicado 2018-139-01 a pesar que reside en el exterior.

Finalmente señala que por el comportamiento asumido por la señora Laura Fernanda Arango Rodríguez contra su padre, existe proceso de indignidad sucesoral que se tramita en el Juzgado 28 de Familia de Bogotá expediente 2020-046.

Anexa copia de la decisión de febrero 4 y 5 de 2019, dentro de la medida de protección No. 1844 de 2018 y copia de la decisión que la confirma proferida por el Juzgado 16 de Familia de Bogotá, el 13 de agosto de 2019.

Copia del auto admisorio de la demanda de indignidad sucesoral formulada por el señor José Daniel Arango Gómez contra Laura Fernanda Arango Rodríguez, que se tramita ante el Juzgado 28 de Familia de Bogotá radicación 2020-046 y consulta del proceso de interdicción promovido por la demandada en el Juzgado 11 de Familia de Bogotá expediente NO 2018-059 contra el señor José Daniel Arango Gómez y del proceso de interdicción contra la señora Natalia Arango Rodríguez en el Juzgado 21 de Familia con radicado 2018-0139-01.

Solicita se mantenga incólume el mandamiento de pago librado.

CONSIDERACIONES

Es lo cierto que el numeral 3 del artículo 442 del Código General del Proceso dispone que los hechos que configuren excepciones previas deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago. De prosperar alguna que no implique la terminación del proceso el juez adoptará las medidas respectivas para que el proceso continúe, o si fuere el caso, concederá al ejecutante un término de cinco (5) días para subsanar los defectos o presentar los documentos omitidos, so pena de que se revoque la orden de pago, imponiendo condena en costas y perjuicios.

Y son precisamente las taxativas excepciones consagradas en el artículo 100 del Código precitado las únicas que pudo haber esgrimido la aquí ejecutada frente a la orden de apremio librada en su contra y analizando la censura presentada, se encuentra que la excepción propuesta encuadra como previa, pues está consagrada en el numeral 4 de la citada disposición.

Como la propuesta por la demandada es la excepción de INCAPACIDAD DEL DEMANDANTE, se procede a su estudio.

Sabido es que el marco del proceso judicial en general, son múltiples las conductas que puede ejercer el demandado en defensa de sus intereses una vez ha sido notificado del auto admisorio de la demanda, en efecto, el ejercicio del derecho de defensa y contradicción no se agota con el solo hecho de la contestación de la demanda y la proposición de excepciones, que es la forma por excelencia de defensa judicial, sino que puede el demandado desplegar otros mecanismos de defensa como son: la impugnación del auto admisorio, a través de los recursos de ley; guardar silencio en el término del traslado; allanarse a las pretensiones de la demanda; negar justificadamente los hechos que se aducen en la demanda, o como acontece en el asunto de marras, elevar excepciones previas, con el objeto sanear los vicios o errores procesales en los que se haya incurrido al tramitar el proceso.

En términos de la doctrina nacional, se ha señalado: *«sin bien nuestra legislación las ha denominado excepciones previas, en realidad su naturaleza corresponde a unos mecanismos diseñados por el legislador para buscar el saneamiento del proceso cuando este se encuentre viciado de alguna irregularidad. En otras palabras, con las excepciones previas se pretende depurar el proceso cuando adolezca de alguna anomalía'»*.

En el caso concreto, de la excepción previa consistente en incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado, recogida en el artículo 100 numeral 4º del Código General del Proceso, se tiene, que la doctrina nacional la ha definido de la siguiente manera:

«Si bien toda persona, por el hecho de ser sujeto de derecho, tiene capacidad para ser parte, no todas pueden comparecer por sí mismas al proceso. Por ello el legislador ha previsto que las personas que pueden disponer de sus derechos tienen capacidad para comparecer por sí mismas al proceso [...], en tanto que las demás deberán hacerlo por intermedio de sus representantes (CGP, art. 54).

Pero ¿quiénes pueden disponer de sus derechos? Para responder a este interrogante, debemos remitirnos al contenido del artículo 1504 del Código Civil, el cual reza:

“Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y sordomudos que no pueden darse a entender.

Sus actos no producen ni aun obligaciones naturales y no admiten caución.

INC. 3º Modificado. D. 2820/74 artículo 60. Son también absolutamente incapaces los menores adultos que no han obtenido habilitación de edad y los disipadores que se hallen bajo interdicción. Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes

Además de estas incapacidades hay otras particularidades que consisten en la prohibición que la ley ha interpuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos”

Así las cosas, la incapacidad solo de las personas naturales señaladas en la disposición transcrita. Para que ellas puedan comparecer al proceso, deberán actuar por intermedio de su representante legal o de un curador *ad litem* designado (CGP, art 55). En el evento en que el demandante sea una persona natural que no pueda comparecer por sí misma al proceso porque se encuentra en un estado de incapacidad absoluta o relativa, al demandado le cabe la posibilidad de plantear la excepción previa a las que nos referimos. Sin embargo, no puede ser formulada en el caso contrario, es decir, cuando es el demandado quien carece de capacidad para comparecer al proceso, dado que se aplica la

máxima según las cual *nadie puede invocar su propia torpeza en su favor (nemo auditur propriam turpitudinem allegans)*¹»

El caso concreto, la recurrente, tal como fue señalado en los antecedentes de este proveído, plantea que en el JUZGADO ONCE DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, cursa proceso de interdicción en contra de JOSE DANIEL ARANGO GOMEZ, quien adicionalmente fue diagnosticado con «demencia en la enfermedad de Alzheimer de comienzo tardío», de acuerdo con la evaluación neuropsicológica de fecha 17 de noviembre de 2012, realizada por la Doctora EUGENIA SOLANO GUTIERREZ, 09 de agosto de 2017, realizada por el Doctor MARIO MUÑOZ y 06 de diciembre de 2017, adelantada por el Doctor GABRIEL ARANGO; incapacidad que a también se acredita, a su juicio, con el dictamen emanado del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL, de manera que, según tal postura, el actor carecería de capacidad procesal para hacer valer sus derechos, sin ministerio de otra persona, dentro del proceso de la referencia.

Pues bien, para el juzgado tal mecanismo de defensa no está llamado a prosperar, habida consideración que, si bien las referidas documentales son medios de convicción para acreditar la eventual falta de capacidad de una persona, lo cierto es que, hasta que dicha situación no sea decidida por parte de una autoridad judicial competente, en este caso, un juez de familia, de conformidad con el cauce procesal a que se refiere la Ley 1996 de 2019, artículos 32 y 33 y ss., no se puede privar al demandante del acceso ante la administración de justicia para hacer valer su crédito. Se recuerda que las normas enunciadas son del siguiente tenor:

ARTÍCULO 32. ADJUDICACIÓN JUDICIAL DE APOYOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS. Es el proceso judicial por medio del cual se designan apoyos formales a una persona con discapacidad, mayor de edad, para el ejercicio de su capacidad legal frente a uno o varios actos jurídicos concretos.

La adjudicación judicial de apoyos se adelantará por medio del procedimiento de jurisdicción voluntaria, cuando sea promovido por la persona titular del acto jurídico, de acuerdo con las reglas señaladas en el artículo 37 de la presente ley, ante el juez de familia del domicilio de la persona titular del acto.

Excepcionalmente, la adjudicación judicial de apoyos se tramitará por medio de un proceso verbal sumario cuando sea promovido por persona distinta al titular del acto jurídico, conforme a los requisitos señalados en el artículo 38 de la presente ley.

PARÁGRAFO. El Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en un plazo no superior a un (1) año contado a partir de la expedición de los lineamientos de valoración señalados en el artículo 12, diseñará e implementará un plan de formación a jueces y juezas de familia sobre el contenido de la presente ley, sus obligaciones específicas en relación con procesos de adjudicación judicial de apoyos y sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

ARTÍCULO 33. VALORACIÓN DE APOYOS. En todo proceso de adjudicación judicial de apoyos se contará con una valoración de apoyos sobre la persona titular del acto jurídico. La valoración de apoyos deberá acreditar el nivel y grados de apoyos que la persona requiere para decisiones determinadas y en un ámbito específico al igual que las personas que conforman su red de apoyo y quiénes podrán asistir en aquellas decisiones.

¹ Cfr. Cruz Tejada, Horacio. *Puesta en práctica del Código General del Proceso. Conductas de demandado en el proceso civil.* Universidad de los Andes 2019 pp. 292 y ss.

[...]

La normas trascritas deben ser interpretadas armónicamente con el contenido del artículo 6° del mismo cuerpo normativo, que hace alusión a la presunción de la capacidad de toda personas y a la no limitación de su capacidad de ejercicio con ocasión de la discapacidad, independientemente de si cuenta o no con los apoyos para la realización de sus actos jurídicos diseñados por el legislador. Así, tal disposición previene:

«Todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos. En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona.»

La presunción aplicará también para el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión laboral» Énfasis del juzgado.

A lo que se suma, la prohibición del legislador para adelantar o seguir tramitando proceso de interdicción ante los jueces de familia, tal como lo contempla el artículo 53 de la multicitada Ley 1996 de 2019, que perentoriamente señala: «*Queda prohibido iniciar procesos de interdicción o inhabilitación, o solicitar la sentencia de interdicción o inhabilitación para dar inicio a cualquier trámite público o privado a partir de la promulgación de la presente ley*», siendo que los procesos de interdicción en curso, por mandato del hacedor de la ley, deberán ser suspendidos en los términos del artículo 55 *ibídem*.

Ahora bien, el 23 de septiembre de 2019, el Juzgado Once (11) de Familia de Oralidad, atendiendo la promulgación de la Ley 1996 de 2019, que en su artículo 55 señala: “*Aquellos procesos de interdicción o inhabilitación que se hayan iniciado con anterioridad a la promulgación de la presente ley deberán ser suspendidos de forma inmediata...*”, dispuso suspender el proceso de interdicción judicial por discapacidad mental absoluta presunto interdicto José Daniel Arango Gómez, radicado bajo el número 2018-00059, “*con el fin de verificar y establecer la adecuación al trámite que corresponda, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1196 de 2019*”.

Igualmente, en auto del 16 de diciembre de 2019, el Juzgado Once (11) de Familia de Oralidad, señaló que “*...es oportuno señalar con base en la disposición legal, que cualquier acto que sea necesario realizar en representación de una persona en condición de discapacidad, deberá ser precedido de un nuevo proceso, en el que se solicite la adjudicación judicial de apoyo transitorio, y que seguirá el trámite indicado en el artículo 54 de la Ley 1996*”, por lo cual dispuso negar la solicitud de levantamiento de la suspensión del proceso, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley 1996 de 2019.

En mérito de lo considerado se concluye: (i) que son capaces de ejercer sus derechos todas aquellas personas que la ley no le excluye de tal condición, (ii) no hay lugar a adelantar, bajo el vigor de la Ley 1996 de 2019, proceso de interdicción o seguir tramitando los ya iniciados con anterioridad a esta y (iii) el juez debe garantizar el acceso a la administración de justicia de todas las personas incluidos los discapaces en condiciones de igualdad, tenga o no los apoyos a que se refiere la prenotada ley.

En tal virtud, no encuentra probada el despacho la enunciada excepción previa, puesto que, se itera, a la fecha ninguna autoridad judicial competente ha declarado que el aquí demandante debe concurrir en los actos jurídicos por conducto de apoyos judiciales, y dado que, hasta que se demuestre lo contrario, se le presume su capacidad de ejercicio; máxime, cuando, como acontece en este caso, está actuando en defensa de sus intereses

para procurar el recaudo de las obligaciones contenidas en los títulos báculo del recaudo ejecutivo.

Por estas razones, habrá de declararse impróspera la excepción previa bajo estudio, tal como en efecto quedará sentado en la parte dispositiva de esta providencia.

Así las cosas, y determinados los requisitos que se deben verificar para la procedencia de esta excepción se observa que no se configura la misma como quiera que no se dan los supuestos necesarios, por lo cual se mantendrá el auto recurrido.

DECISIÓN

En virtud de las anteriores consideraciones, el **JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO.- DECLARAR NO PROBADA la excepción previa de INCAPACIDAD DEL DEMANDANTE, propuesta a través de recurso de reposición por el apoderado judicial de la demandada, contra el auto de mandamiento de pago calendarado 13 de enero de 2020, y en consecuencia, se mantiene el auto recurrido, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO.- Vencido el término para formular excepciones de mérito, regrese el proceso al despacho para proseguir el trámite.

NOTIFÍQUESE (4)

(firma electrónica)
GLORIA INES OSPINA MARMOLEJO
JUEZ

<p><i>JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.</i></p> <p><i>La presente decisión es notificada por anotación en ESTADO ELECTRONICO No. 030 Hoy veintiocho (28) de abril de 2021 a la hora de las 8:00 a.m.</i></p> <p><i>La Secretaria</i></p> <p><i>Diana María Acevedo Cruz.</i></p>

Firmado Por:

**GLORIA INES OSPINA MARMOLEJO
JUEZ
JUZGADO 020 MUNICIPAL CIVIL ORAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-
SANTAFE DE BOGOTA D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

dac090b5f15b82aa2a302b151649171a03d5dbb7267895729fbedec1cd5192e4

Documento generado en 27/04/2021 04:17:25 PM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**